Señores:

**TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÀ – SALA DE EXTINCION DE DOMINIO.**

E. S. D.

Referencia: ACCION DE TUTELA

DEMANDANTE: OLGA ZIPA AMAYA

DEMANDADOS: JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ, ABOGADOS JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON y OMAR DARIO TORO GONZALEZ.

**OLGA ZIPA AMAYA,** identificada como aparece al pie de mi firma, actuando en nombre, invocando el artículo 86 de la Constitución Política, acudo ante su Despacho para instaurar ACCIÓN DE TUTELA contra el JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ y los ABOGADOS JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON y OMAR DARIO TORO GONZALEZ, con el objeto de que se me protejan mis derechos fundamentales al debido proceso por falta de defensa técnica, doble instancia y mínimo vital de conformidad con los siguientes:

**HECHOS**

**PRIMERO:** El 15 de enero de 2018 suscribí contrato de prestación de servicios profesionales con los abogados JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON y OMAR DARIO TORO GONZALEZ, cuyo objeto era *“.-OBJETO:- El CONTRATANTE O PODERDANTE, contrata los servicios profesionales del CONTRATISTA O APODERADO, para que la asesore y represente hasta su culminación en el TRAMITE DE EXTINCIÓN DE DOMINIO No. 110013120001-2017-00096-01 (143 E.D), Juzgado Primero Especializado de Extinción de Dominio, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá. 2.- Realizar la vigilancia y seguimiento correspondiente a dicho proceso. 3.- Realizar la asesoría, vigilancia y seguimiento al proceso No. (143 E.D), del Fiscal 57 delegado de Extinción de Dominio”.* Cumpliendo la suscrita con las obligaciones a mi cargo allí pactadas, así como el pago en su totalidad de los honorarios establecidos.

**SEGUNDO:** Tuve contacto con el abogado JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON hasta septiembre u octubre de 2019 cuando le informe que me llego telegrama comunicándome que ya se había proferido sentencia de primera instancia, para que por favor verificara el contenido y me contara, luego me llamo me dijo que había salido negativa a nuestros intereses pero que se iba a poner a trabajar con el socio en el recurso de apelacion, hasta ahí tuve contacto con los abogados.

**TERCERO:** Para inicios del año 2020 sufrí un accidente cerebrovascular del cual gracias a Dios soy sobreviviente estando hospitalizada varias semanas en el Hospital Internacional de Colombia en Piedecuesta – Santander, quedando postrada a una cama por varios meses, sin embargo pedí el favor a mis hijas que le comunicaran al abogado JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON, mi situación y nos informara el estado actual del proceso, pero no fue posible ya que nunca contestó los mensajes del whatspp, ni del correo electrónico, ni mucho menos las llamadas telefónicas realizadas al abonado telefónico No. **3133507133** número telefónico perteneciente al abogado JOSE FERNADO BELTRAN GARZON, a la fecha no he tenido comunicación con el abogado a pesar de que he insistido con llamadas y mensajes él no responde.

**CUARTO:** A finales del julio del año 2021 con ocasión de la visita de un funcionarios de la Sociedad de Activos Especiales- SAE a mi vivienda con el fin de hacer un avaluó al predio objeto de extinción de dominio, vuelvo a intentar comunicación con el abogado JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON sin recibir respuesta alguna, motivo por el cual y pensado que el proceso cursaba en el Tribunal Superior de Bogotá – Sala de Extinción de dominio escribí a la Secretaria de dicha corporación solicitando información del proceso a unos correo que encontré por internet, mensajes de datos que anexo a la presente acción constitucional.

**QUINTO:** Mediante mensaje de datos recibido el 02 de agosto de 2021 recibí la siguiente respuesta de la secretaria del Tribunal Superior de Bogotá sala de extinción de dominio:

***“De:****Secretaria Sala Extincion Dominio Tribunal Superior - Seccional Bogota <secsedtribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co>****Enviado:****lunes, 2 de agosto de 2021 11:37 a. m.****Para:****Centro Servicios Penales Circuito Especializados Extincion Domin - Bogotá - Bogotá D.C. <cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co>****Cc:****lcatalinahurtado@hotmail.com <lcatalinahurtado@hotmail.com>****Asunto:****RV: Solicitud de colaboración*

*Buenos días.*

*Remito para su conocimiento y fines pertinentes solicitud de información presentada por la señora Olga Zipa Amaya, respecto del proceso radicado****110013120001201700096.***

*Cordialmente.*

***Ana Estefanía Losada Almonacid***

***Escribiente***

***Sala de Extinción de Dominio***

***Tribunal Superior de Bogotá***

***(571) 4233390 ext 8385***

***Avenida Calle 24 No.- 53 - 28 -Oficina 310 - Torre C***

***Bogotá - Colombia “***

**SEXTO:** Mediante mensaje de datos recibido el 02 de agosto de 2020, recibí la siguiente respuesta por parte del Centro de Servicios del Juzgado de los Juzgados de extinción de dominio *“en atención a la solicitud elevada, este CSAJED, se permite informar que en el proceso 2017-096-1 (143 E.D.), se profirió sentencia de primera instancia el 20/09/20, extingue bien. Edicto 30 ejecutoria 7 de octubre de 2019, quedando debidamente ejecutoriado con apelación extemporánea, motivo por el cual se transfirió para archive definitivo”.*

**SEPTIMO:** Con esa noticio seguí buscando e insistiendo al número telefónico del abogado JOSE FERNANDO BELTRAN GARZÒN, para que me informara que había pasado, sin recibir respuesta alguna, pues no me hago a la idea de perder mi vivienda por su descuido y negligencia de un profesional del derecho, lo busque en la oficina pero no me dejaron ingresar, escribí varias veces al Juzgado para tener acceso al expediente y consultar el concepto de otro abogado pero tampoco fue posible pues recibí como respuesta lo siguiente: *“se le informa que el proceso referenciado se encuentra archivado, por lo cual se eleva la presente, una vez se encuentre desarchivado y disponible en este CSAJED, se le comunicará para lo de su petición”*; y hasta la fecha no he recibido comunicación alguna.

**OCTAVO:** El abonado telefónico **3133507133** perteneciente al abogado JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON, está activo pues de ese número él tiene acceso a los estados que mi hija coloca en WHATSAP de mi hija.

**NOVENO:** La suscrita no tiene por qué soportar la desidia, negligencia e irresponsabilidad de los abogados JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON y OMAR DARIO TORO GONZALEZ, existiendo posibilidades de que la segunda instancia revise y revoque el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en extinción de dominio de la ciudad de Bogotá y pueda conservar mi vivienda que es el único medio de subsistencia que tengo ya que no soy beneficiaria de pensión alguna, por mi edad y enfermedad no consigo trabajo, y mi único sustento es la renta que percibo por el arriendo de las habitaciones en mi inmueble.

**DECIMO:** Deposite mi confianza y ahorros en los abogados JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON y OMAR DARIO TORO GONZALEZ, pues se suponía que eran expertos en procesos de extinción de dominio , en la contadora que me hicieron contratar, para evitar la extinción del dominio de mi casa de habitación, me siento defraudada, abusada de la confianza yo vi en el abogado JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON, un hombre honesto y respetuoso, o por lo menos debió avisarme que no quería no podía trabajar mas en mi caso y no abandonar el proceso hasta el punto que ya están haciendo avaluó para rematar mi casa.

El proceder negligente, deshonroso para la profesión me vulnero mi derecho a la defensa técnica y a la doble instancia, y hasta el mínimo vital.

**DECIMO PRIMERO:** Soy una mujer de 59 años de edad, próxima a cumplir 60 años, diabética e hipertensa disminuida físicamente en la parte izquierda de mi cuerpo por accidente cerebrovascular, lo que me hace una persona de especial protección constitucional, soltera sin ningún tipo de pensión o renta diferente a la que recibo como precio del arriendo de las habitaciones de mi casa que pretenden extinguir el dominio.

**DERECHOS VULNERADOS**

Estimo que me están vulnerado mi derecho fundamental al debido proceso por falta de defensa técnica.

**El derecho a la defensa técnica[[1]](#footnote-1)**

Los siguientes fundamentos normativos y jurisprudenciales fueron extraídos del reciente pronunciamiento emito por la Corte Constitucional en la Sentencia T-366/21, Expediente T-8.070.085, Acción de tutela de Boris Fernando Marín Muñoz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Magistrada ponente CRISTINA PARDO SCHLESINGER.Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

31. Ahora bien, en cuanto trata del derecho al debido proceso en su faceta de contar con una efectiva defensa técnica, a diferencia de los asuntos citados en el numeral 29 *supra,* en el caso de la referencia la vulneración a la doble conformidad no se habría producido por providencias que negaran la validez de tal derecho. Por el contrario, se trató de la eventual omisión en que habría incurrido la autoridad demandada cuando, ante el silencio procesal que el actor y su apoderado guardaron frente de sentencia condenatoria, el Tribunal Superior de Ibagué no se aseguró de que el actor pudiera materialmente conocer sobre los fines y objeto de su derecho a la doble conformidad y, en tal orden, pudiera expresar libremente y con conocimiento informado su voluntad de acceder o no a tal posibilidad procesal.

32. El artículo 29 de la Constitución (debido proceso) contempla el derecho que tiene el sindicado *“a la defensa ya a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento”.* Con este derecho la Carta persigue dotar al procesado de las garantías necesarias para ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. Así, con la garantía de defensa técnica se le permite al sindicado que, a través de un profesional del derecho[[2]](#footnote-2), pueda hacer uso de los diferentes recursos que le otorga el ordenamiento procesal, allegar y controvertir pruebas y, en fin, oponerse efectivamente a las pretensiones que se presenten en su contra[[3]](#footnote-3).[[4]](#footnote-4)

33. El derecho a la defensa técnica se hace efectivo siempre y cuando el profesional del derecho que el sindicado escoja o, en su defecto, que el Estado le asigne como abogado defensor de oficio, desempeñe su encargo de manera suficientemente razonable y responsable. En aras de ello, además de la responsabilidad civil común a todas las personas, el ordenamiento contempla sanciones tanto disciplinarias[[5]](#footnote-5) como penales[[6]](#footnote-6) para el abogado que incumpla sus deberes profesionales en perjuicio de su representado.

Sobre este particular, sin embargo, cabe señalar que no toda actuación u omisión del defensor técnico es fuente de responsabilidad o constituye un incumplimiento de sus deberes profesionales. Ciertamente, en algunos casos, el silencio procesal puede entenderse como parte de la estrategia legítima del abogado defensor, en desarrollo de su autonomía profesional y en procura de la defensa de los intereses de su cliente; todo ello, se resalta, *“cuando las circunstancias así lo aconsejen, siempre dentro de los prudentes límites de la razón y con miras a la defensa de los intereses del procesado.”[[7]](#footnote-7)*

34. En línea con lo anterior, la Corte Constitucional ha contemplado la posibilidad de ejercer la acción de tutela contra autoridades judiciales cuando sus actuaciones perjudiquen intereses de una persona por actuaciones u omisiones de su defensor técnico.

34.1 Por ejemplo, mediante Sentencia **T-654 de 1998**[[8]](#footnote-8), la Sala Tercera de Revisión de la Corte revocó una sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Superior de Cundinamarca en el marco de un proceso penal adelantado por homicidio. En sustento de lo anterior, la Sala de Revisión señaló, entre otros, que *“desde su iniciación, el juicio criminal seguido contra el actor, dio lugar a la vulneración de su derecho fundamental a la defensa material y técnica. Ello tuvo como resultado que se profiriera una decisión fundada en elementos de juicio insuficientes que no habían sido controvertidos por el imputado, la que quedó en firme dada la negligencia del apoderado de oficio y la falta de información que, sobre el proceso en curso, se suministró al implicado.”*

34.2 En cambio, luego de constatar que *“durante todo el proceso el actor contó con la asistencia de profesionales del derecho tanto contractuales como de oficio, y si bien no estuvo presente ello no es un error atribuible al juez de la causa en tanto nunca fue enterado sobre el cambio de residencia del demandante y éste tampoco cumplió su deber de estar al tanto de lo que ocurría en un proceso que a partir de la indagatoria sabía que cursaba en su contra”,* en Sentencia**T-831 de 2008**[[9]](#footnote-9) la Sala Quinta de Revisión de la Cortenegó el amparo de tutela solicitado con fundamento en la falta de defensa técnica. Con todo, en dicha sentencia se señaló que *“para determinar la procedencia de la acción de tutela contra una providencia judicial en virtud de una eventual violación al derecho a una defensa técnica no es suficiente demostrar que existieron fallas en la defensa del procesado para que proceda el amparo constitucional pues en ese caso ha de comprobarse, según la jurisprudencia de esta Corporación que la pretendida falla i) no pueda imputarse directa o indirectamente al defendido, pues si éste renuncia al ejercicio personal de su defensa, al no comparecer conociendo la existencia de un proceso en su contra y delegarla en su totalidad en el apoderado de confianza o en el defensor de oficio, deslegitima su interés de protección, debiendo en esos casos asumir directamente las consecuencias del proceso; ii) haya afectado otros derechos del sindicado en el contexto de lo que constituye el debido proceso penal; iii) no tuvo o pudo haber tenido como fundamento la estrategia de defensa del abogado; iv) y tuvo o pudo haber tenido un efecto en la providencia cuya constitucionalidad se cuestiona.**[[39[[10]](#footnote-10)]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-831-08.htm" \l "_ftn39)”*

34.3 Luego, en Sentencia **T-131 de 2012**[[11]](#footnote-11) que negó una acción de tutela ejercida por una persona que fue condenada por un delito contra la Administración Pública, la Sala Novena de Revisión de la Corte recordó que *“dado que el derecho a la defensa técnica puede ejercerse de formas muy diversas**[[37[[12]](#footnote-12)]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-131-12.htm" \l "_ftn37), la Corte ha adoptado estrictos criterios para la aceptación de la procedencia de la acción, como consecuencia de la actuación desplegada por el defensor de oficio…“(1) que efectivamente existieron fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada; (2) que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado; (3) que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos anotados - sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental-; (4) que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso”****[[38[[13]](#footnote-13)]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-131-12.htm" \l "_ftn38)****.”*

34.4 En Sentencia **T-385 de 2018**[[14]](#footnote-14), en un caso que guarda alguna similitud con que ahora ocupa a la Corte, la Sala Primera de Revisión resolvió dejar sin efectotodo lo actuado en un proceso penal adelantado por cuenta de un homicidio, a partir de la resolución por la cual se llamó a indagatoria al sindicado; proceso en donde se había dictado sentencia condenatoria de primera instancia sin que esta fuera apelada. En sustento de su decisión, la mencionada Sala señaló, entre otras cosas, que

“las actuaciones de (los) defensores (del actor) no cumplieron las condiciones materiales para ser consideradas *reales*,(…). El primer defensor de oficio se limitó a ser notificado de las decisiones que se produjeron en el transcurso del proceso; sin embargo, no adelantó ninguna gestión litigiosa, *real*, en procura de los intereses de(l) (actor). Esta ausencia de defensa técnica generó, en el transcurso del proceso, una situación de indefensión del tutelante.

136.  El segundo defensor de oficio, por su parte, no interpuso el recurso de apelación en contra de la sentencia condenatoria de primera instancia, pese a que el juzgado no atendió su argumento de falta de credibilidad de uno de los testimonios. Esta situación redundó en una ausencia de asistencia efectiva, con el agravante de que, para el momento en que se dictó la sentencia (junio 23 de 2015), el tutelante ya había sido privado de la libertad y puesto a disposición del juzgado accionado

137.      No puede la Sala, de otro lado, asumir que se está ante una simple discrepancia del accionante con la estrategia que adelantaron sus defensores de oficio. Si bien el silencio puede ser considerado como una estrategia de litigio, al punto de que el ordenamiento jurídico garantiza el derecho a guardar silencio, también lo es que el abandono total del proceso no puede considerarse expresión de aquel. En el primer caso se trata de una estrategia que se materializa con la omisión del profesional del derecho, mientras que en la segunda se trata de la indefensión generada, precisamente, por la inactividad de este.

138.      Desde luego, estas omisiones no pueden atribuirse, en su integridad, al juzgado accionado. Sin embargo, en lo que respecta a sus competencias, se puede constatar su omisión de *“realizar un control constitucional y legal con el fin de verificar el respeto de los derechos fundamentales del procesado, examinando en detalle el ejercicio del derecho a la defensa”*[[144[[15]](#footnote-15)]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-385-18.htm" \l "_ftn144). De haber actuado en consecuencia habría debido constatar la situación de indefensión en que los defensores del accionante lo pusieron a lo largo del proceso, máxime al haber sido declarado persona ausente en la etapa de instrucción. (…)”

34.5 Poco después, mediante Sentencia **T-463 de 2018**[[16]](#footnote-16) la Sala Quinta de Revisión de esta Corporación dejó sin efectos una sentencia condenatoria de una persona que no fue notificada de la existencia de un proceso en su contra. Así, en esta ocasión, tras señalar que

“se configura un defecto procedimental por desconocimiento del derecho a la defensa técnica ante errores protuberantes y que tengan las siguientes características:

1. Debe ser evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal o jurídica.
2. Las mencionadas deficiencias no deben ser imputables al procesado o haber resultado de su propósito de evadir la justicia[[15[[17]](#footnote-17)]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-463-18.htm" \l "_ftn15).

(iii)      La falta de defensa material o técnica debe ser trascendente y determinante en los resultados de la decisión judicial[[16[[18]](#footnote-18)]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-463-18.htm" \l "_ftn16).”

la citada Sala de Revisión concluyó que *“los defensores públicos [del sindicado] cometieron errores protuberantes, al no haber efectuado una revisión exhaustiva de (i) los documentos allegados el 23 de mayo de 2017, necesarios para proceder a declarar ausente a su defendido y no interponer los recursos del caso; y (ii) de las pruebas allegadas con el escrito de acusación, pues caso contrario, habría podido solicitar se notifique a su defendido en la última dirección que éste aportó y ello pudo haber cambiado el curso de la actuación; ya que en su ausencia era difícil solicitar pruebas que permitieran controvertir el hecho punible a aquel endilgado”.*

34.6 Finalmente, en Sentencia **SU-108 de 2020**[[19]](#footnote-19), la Sala Plena de la Corte resolvió amparar el derecho a la defensa técnica de una mujer demandada ante la jurisdicción ordinaria laboral puesto que el juzgado laboral del conocimiento desconoció que, desde el momento posterior a la contestación de la demanda, la actora no contó con defensor técnico, sin que ello fuera imputable a su desidia[[20]](#footnote-20).

Ahora bien, recordando la interacción que existe entre la efectiva prestación del servicio y derecho a la defensa técnica y el derecho a la doble conformidad de la primera sentencia condenatoria (35 *supra*), la Sala destaca que, aplicando las reglas de la Sentencia T-463 de 2018 (34.5 *supra*), existiría un desconocimiento a la defensa técnica cuando (i) sea *“evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal o jurídica*”; (ii) *“(l)as mencionadas deficiencias no [puedan] ser imputables al procesado o haber resultado de su propósito de evadir la justicia”*; y (iii) *“(l)a falta de defensa material o técnica deb(a) ser trascendente y determinante en los resultados de la decisión judicial”*.

**PRETENSIONES**

Con fundamento en los hechos relacionados, solicito a los señores Magistrados disponer y ordenar:

**PRIMERO:** Tutelar a mi favor los derechos fundamentales debido proceso por falta de defensa técnica, doble instancia y mínimo vital.

**SEGUNDO:** **DEJAR SIN EFECTO**lo actuado en el proceso No. 110013120001-2017-00096-01 (143 E.D), que curso en el Juzgado Primero Especializado de Extinción de Dominio de Bogotá, a partir de la notificación de la sentencia dictada el 20 de septiembre de 2019, para así poder hacer ejercicio del recurso de apelación.

**PRUEBAS**

Aporto como pruebas los siguientes documentos:

* Copia historia clínica.
* Contrato de prestación de servicios.
* Pantallazo de los correos que se escribieron al Juzgado y sus respuestas.
* Pantallazo del correo que se escribió al abogado JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON.
* Pantallazos de información que se envió al correo del abogado JOSE FERNADNO BELTRAN GARZON, para demostrar que ese efectivamente es su correo.
* Pantallazo del correo que se recibió por parte del abogado JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON con la oferta de servicios, poderes y contrato.
* Pantallazo de los Whatsap que se escribieron al abogado solicitando información del proceso, lo cuales nunca contestó.
* Pantallazo de Whatsap donde se observa que el abogado JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON, aún tiene en mismo número de celular y tiene registrado el número de mi hija por que mira sus estados de Whatsap.

**FUNDAMENTOS DE DERECHO**

Fundamento esta acción en el artículo 86 de la Constitución Política de 1991 y sus decretos reglamentarios 2591 y 306 de 1992, sentencia T-366 del 07 de diciembre de 2021.

**NOTIFICACIONES**

Recibiré notificaciones en el celular 3112443864, correo electrónico: lcatalinahurtado@hotmail.com

Los abogados JOSE FERNANDO BELTRAN GARZON y OMAR DARIO TORO GONZALEZ, las recibirán en el correo electrónico [febenexos@gmail.com](mailto:febenexos@gmail.com) y en el celular 3133507133.

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ, las recibirá en el correo electrónico [cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:cserjesextdombt@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Atentamente,

**OLGA ZIPA AMAYA**

**C. C. No. 40.017.252 de Tunja.**

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamenteInterfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

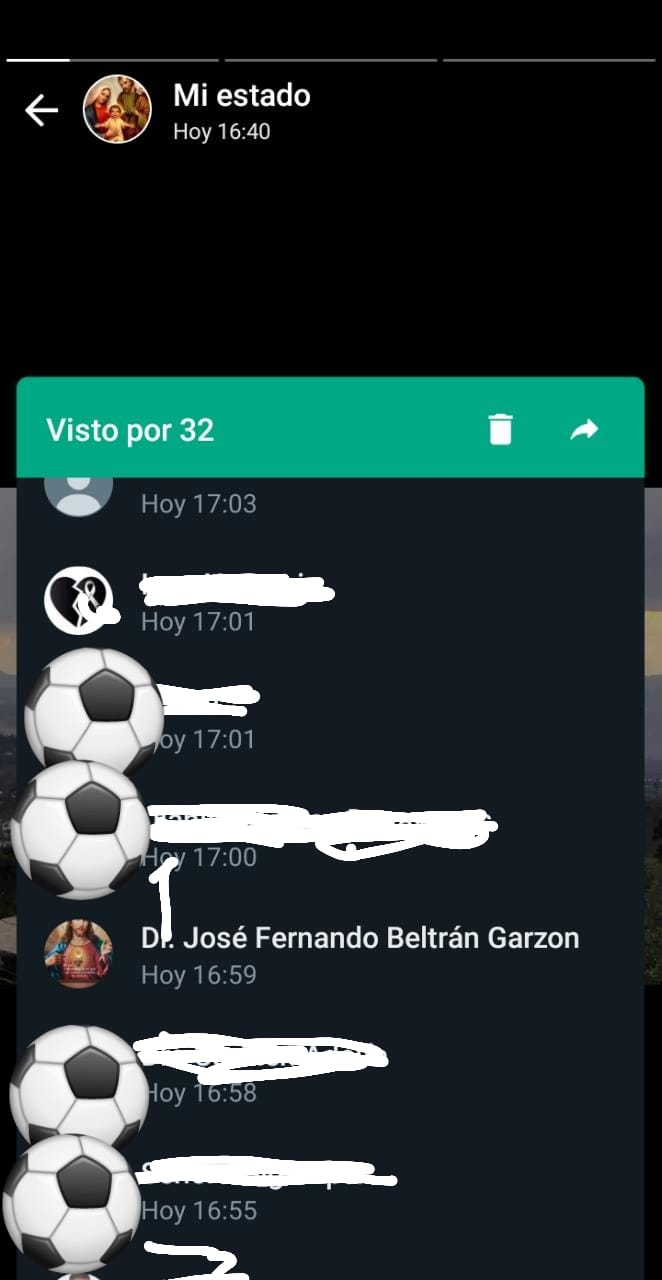
Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de texto

Descripción generada automáticamente



1. Sentencia T-366/21, Expediente T-8.070.085, Acción de tutela de Boris Fernando Marín Muñoz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué. Magistrada ponente CRISTINA PARDO SCHLESINGER.Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021). [↑](#footnote-ref-1)
2. La ley excepcionalmente permite que la defensa sea ejercida por *personas “que reúnan al menos las condiciones de egresados, o estudiantes de derecho pertenecientes a un consultorio jurídico, pues de esta forma se consigue el objetivo de que dichos defensores sean personas con cierta formación jurídica.”* (Sentencia SU-044 de 1995, MP Antonio Barrera Carbonell). [↑](#footnote-ref-2)
3. *Cfr.*, entre otras, las sentencia T-610 de 2001 (MP Jaime Araújo Rentería), C-152 de 2004 (MP Jaime Araújo Rentería), C-025 de 2009 (Rodrigo Escobar Gil), C-127 de 2011 (MP María Victoria Calle Correa) y T-018 de 2017 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo). [↑](#footnote-ref-3)
4. El derecho a la defensa técnica resulta particularmente relevante en el ámbito penal por el rango de los derechos que dentro de tales procesos se encuentran en juego. No obstante, el ordenamiento también procura que las partes en procesos de otra naturaleza cuenten con la asistencia de un profesional del derecho. En este sentido, en Sentencia C-542 de 2019 (MP Alejandro Linares Cantillo) la Sala Plena sostuvo que *“(a)unque el derecho a la defensa técnica se proyecta con mayor intensidad en el desarrollo del proceso penal, en razón de los intereses jurídicos que allí se ven comprometidos, la Corte ha establecido que esta prerrogativa debe ser garantizada por el Estado en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de tal forma que permita a las personas hacer valer sus derechos sustanciales y hacer cumplir las formalidades propias de cada juicio.”* [↑](#footnote-ref-4)
5. Ver Ley 1123 de 2007 (Código Disciplinario del Abogado). [↑](#footnote-ref-5)
6. Ver artículo 445 de la Ley 599 de 2000 (Infidelidad a los deberes profesionales). [↑](#footnote-ref-6)
7. *Cfr*. Sentencia C-069 de 2009 (MP Clara Inés Vargas Hernández) [↑](#footnote-ref-7)
8. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. [↑](#footnote-ref-8)
9. MP Mauricio González Cuervo. [↑](#footnote-ref-9)
10. [[39]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/T-831-08.htm" \l "_ftnref39) Sentencias T-654 de 1998 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz, T-784 de 2000 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, T-028 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-066 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil (,) T-068 de 2005 M.P. Rodrigo Escobar Gil. [↑](#footnote-ref-10)
11. MP Luis Ernesto Vargas Silva. [↑](#footnote-ref-11)
12. [[37]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-131-12.htm" \l "_ftnref37) Ver, entre muchas otras, las sentencias T-654 de 1994, C-488 de 1996 y SU-960 de 1999. [↑](#footnote-ref-12)
13. [[38]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/t-131-12.htm" \l "_ftnref38)Ver sentencias T-654 y T-776 ambas de 1998. Más recientemente ver la sentencia T-957 de 2006 [↑](#footnote-ref-13)
14. MP Carlos Bernal Pulido. [↑](#footnote-ref-14)
15. [[144]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-385-18.htm" \l "_ftnref144) Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 8 de mayo de 2008, con Radicado No. 28115. [↑](#footnote-ref-15)
16. MP Antonio José Lizarazo Ocampo. [↑](#footnote-ref-16)
17. [[15]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-463-18.htm" \l "_ftnref15) La expresión es tomada literalmente de la sentencia T-1049 de 2012 que, retoma las consideraciones de las sentencias T-450/11 M.P Humberto Sierra Porto y T-831/08 M.P Mauricio González. [↑](#footnote-ref-17)
18. [[16]](https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2018/t-463-18.htm" \l "_ftnref16) *Sobre este tema ver las sentencias T-450/11 M.P Humberto Sierra Porto, T-395/10 M.P Jorge Ignacio Pretelt; T-831/08 M.P Mauricio González, T-962/07 M.P Clara Inés Vargas Hernández, T-068/05 M.P. Rodrigo Escobar Gil, T-028/05 M.P. Clara Inés Vargas Hernández, T-784/00 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa, y T-654/98 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.*Citadas por la sentencia T-1049 de 2012. [↑](#footnote-ref-18)
19. MP Carlos Bernal Pulido. [↑](#footnote-ref-19)
20. Como fundamento de su decisión, la Sala Plena consideró que “*el Juez Treinta y Dos Laboral del Circuito de Bogotá desconoció “los postulados procesales aplicables al caso”, por cuanto adelantó el trámite laboral ordinario de primera instancia, a pesar de que María Analfi Santa no contaba con la debida representación judicial y, con ello, vulneró su derecho fundamental al debido proceso. Además, dicha omisión por parte de la autoridad judicial configuró un “defecto procedimental absoluto” por ausencia de defensa técnica, dado que (i) no se encontraba amparada por una estrategia de defensa judicial; (ii) no le era imputable a María Analfi Santa, (iii) fue determinante para el sentido de las decisiones judiciales y (iv) afectó de forma evidente los derechos fundamentales de la accionante.”* [↑](#footnote-ref-20)